

sagrado toda su alta inteligencia y todo su gran corazón á la regeneración de la patria!

Y aquellas impresiones del primer momento se renovaron con mayor intensidad el día de los funerales del gran patriota, funerales espléndidos como París sabe hacerlos á los que glorifica y ama. Todo el Parlamento, todos los grandes cuerpos del Estado, todo el mundo oficial asistían al entierro; pero quien presidía el duelo era Francia; era la nación francesa la que rendía los supremos honores á uno de sus mejores hijos. La República había perdido una fuerza y una gala; por primera vez, desde su triunfo, había recibido una grave herida. Para la patria francesa, la muerte de aquel grande hombre era una derrota, una batalla perdida en plena paz.

El día 4 de enero de 1883, Chanzy, comandante del 6.º cuerpo de ejército, sucumbió en Chalons-sur-Marne: Francia veía desaparecer, casi al mismo tiempo, las dos esperanzas del porvenir, los dos factores principales de las reparaciones esperadas, los mejores operarios de su resurrección.

La legislatura ordinaria de 1883 se abrió tristemente bajo la impresión de aquel doble duelo. Los primeros días fueron consagrados á la elección de las mesas. La Royer fué elevado á la presidencia del Senado y Brisson á la de la Cámara. El trabajo parlamentario no se reanudó hasta el 15 de enero, con la lectura de un manifiesto de Duclerc sobre la política exterior. En este documento, el presidente del Consejo refería los sucesos de Egipto desde que él se había encargado de la cartera de Negocios extranjeros y concluía declarando que la intervención anglo-francesa había dejado de existir. Francia se retiraba, no sin dignidad, pero se retiraba al fin de los asuntos de Egipto.

Al día siguiente apareció en las esquinas de París un manifiesto-cartel del príncipe Napoleón, en que, después de haber acusado al gobierno de «ateísmo persecutor», el inesperado defensor de la religión acusaba á la política exterior de Francia de obrar «de mala fe con los débiles», de ponerse «al servicio de especulaciones particulares en Túnez» y de mostrarse «cobarde é inepto» en Egipto. El manifiesto tenía por conclusión el aforismo trivial del partido bonapartista: «Todo lo que se hace sin el pueblo es ilegítimo.»

El gobierno que hubiera podido desdeñar las injurias y los ataques del príncipe, dejando que los periódicos bonapartistas le pusieran en ridículo, ó mandar arrancar el cartel y conducir al autor á la frontera, acto ilegal, pero franco y rápido, que las Cámaras hubiera perdonado sin duda ante la invocación de la razón de Estado y de la salud pública, el gobierno, decimos, no apeló á ninguno de estos medios, sino que, como todos los poderes débiles, optó por una solución intermedia que ofrecía todos los inconvenientes posibles y no satisfacía á nadie. Rompiéronse los carteles y se prendió al príncipe Napoleón, contra la ley de imprenta, para procesarlo por medio de esta ley.

El mismo día, un diputado bonapartista, Jolibois, interpeló al gobierno sobre la prisión arbitraria llevada á efecto por la mañana, y la Cámara, por 401 votos contra 85, aprobó la conducta del gobierno y hubiera aprobado seguramente una desviación más grave de la legalidad, con lo cual todo hubiera terminado, mientras que ahora todo empezaba. Floquet, muy influyente

en el partido radical, á causa de su pasado republicano durante el imperio, y que debía gran parte de su popularidad á la actitud que había adoptado en la prefectura del Sena, Floquet, que aspiraba quizá á desempeñar, en parte al menos, el papel de Gambetta, presentó una proposición de iniciativa parlamentaria que tendía á prohibir el territorio de la República á los príncipes de las familias que habían reinado en Francia. Votóse la urgencia por 307 votos contra 112, absteniéndose toda la derecha. El gobierno había cometido la falta irreparable de dejarse sorprender por la presentación de la proposición, y toda su conducta, en el desarrollo de la cuestión de los pretendientes, se resintió de este error inicial.

La proposición Floquet adolecía de los más graves defectos: aplicaba á un mal imaginario un remedio desproporcionado y pervirtió en el Parlamento, en la prensa y en el público la sana apreciación de las cosas. Un diputado había pedido la expulsión de los príncipes. Un periódico y de los más violentos, *La Justicia*, pidió la expulsión de los grandes financieros y banqueros israelitas. El público, creyendo en los peligros que los príncipes hacían correr á las instituciones francesas, no fijó su atención en la condenación de Kropotkine y sus cómplices por «anarquía», ni en el llamamiento á las armas lanzado en Lyon por Luisa Michel para derribar á la República.

El gabinete, convencido de que la iniciativa de Floquet exigía la suya, presentó el 20 de enero un proyecto de ley autorizando al gobierno á expulsar por decreto á todo miembro de familia real cuya presencia pudiese comprometer la seguridad del Estado. Al mismo tiempo Devés, ministro de Gracia y Justicia, como si hubiese querido hacer la crítica de las medidas ilegales tomadas por el gabinete y por él mismo, el 16 de enero, propuso una modificación de la ley de imprenta de 1881, añadiendo á la lista de los delitos, reprimidos por el tribunal correccional y no ya por la Audiencia, el delito de ultraje á la República. La Cámara eliminó este último proyecto y envió á la misma comisión el proyecto del ministro del Interior, la proposición de Floquet y una proposición de los Sres. Ballue y Lockroy dando de baja en los cuadros del ejército á los miembros de las familias reales.

La comisión, elegida el 23 de enero, contó 6 miembros partidarios de la proposición Floquet y 5 partidarios del proyecto Fallieres. El 25 de enero adoptó la proposición Floquet y nombró ponente al Sr. Marcou. Al salir de la sesión de la comisión en que se había tomado este acuerdo, Duclerc cayó enfermo y tuvo que renunciar á seguir los trabajos parlamentarios y á ejercer sobre sus compañeros de gabinete la influencia moderadora de un republicano de experiencia, de un hombre recto y de un entendimiento claro.

A partir de este momento, los sucesos se precipitan en una confusión indecible y cada día ocurre una nueva sorpresa. La minoría de la comisión se había adherido á una proposición transaccional de José Fabre, que concedía al gobierno la facultad de expulsión, con sanciones penales, la privación de derechos políticos y la expulsión del ejército. El 29 de enero, Fallieres y Devés declararon ante la comisión que 9 de los 11 ministros aceptaban la proposición Fabre. El almirante Jau-

reguiberry, dimitente, y el presidente del Consejo, enfermo, eran los disidentes. Esta contestación del gobierno indicaba las divisiones que reinaban en el Consejo de ministros sobre una cuestión que, por la inexperiencia de los unos, por la impaciencia de los otros y por la precipitación de todos, había usurpado el primer puesto en las preocupaciones de la opinión. La comisión, tan poco firme en sus ideas como el gabinete, se contradujo en seguida: la minoría se convirtió en mayoría, el Sr. Marcou dimitió el cargo de ponente y fué reemplazado por José Favre.

Una nota de la Agencia Havas, fechada en 28 de enero, complicó aun más el enredo. Esta nota anunciaba las dimisiones de Duclerc y del general Billot. Por decreto de 30 de enero, el ministro del Interior, Fallieres, fué nombrado presidente del Consejo y recibió interinamente la cartera de Relaciones extranjerías. Al ministro de Agricultura, Mahy, se le confió el cargo de ministro interino de Marina. La cartera de la Guerra quedó vacante. Era, pues, un gabinete mutilado é incompleto el que abordaba la discusión de la ley de los pretendientes ante la Cámara, el 30 de enero. Al principio de esta discusión, el nuevo presidente del Consejo sufrió un desmayo en la tribuna y todo el peso del debate recayó sobre el ministro de Gracia y Justicia, Devés, y sobre el subsecretario del Interior, Develle. Al día siguiente, recibieron un auxiliar en la persona del general Thibaudin, llamado al ministerio de la Guerra y que emitió, en el curso de la discusión, una idea llamada á producir efecto: como la ley de 1834 autorizaba, según Thibaudin, al ministro de la Guerra para expulsar del ejército á los príncipes oficiales, evitaría quizá una legislación nueva.

Esta interpretación del nuevo ministro no dejó de influir en la suerte final de contraproyecto Favre. Fué éste combatido casi por todo el mundo, por Ribot, León Renault y el conde de Mun, que lo encontraban peligroso, maléfico y antiliberal; por Floquet, Viette, Madier de Montjau y Pelletán, que lo encontraban insuficiente. Toda aquella elocuencia, gastada contra unos príncipes que se hacían dar el tratamiento de Monseñor y regalaban liebres y perdices á sus amigos, acabó por persuadir á la Cámara que peligraban las instituciones: ésta se declaró en sesión permanente, como en los momentos de grandes crisis nacionales, y el 1.º de febrero, á las doce de la noche, después de haber desechado la proposición Lockroy, adoptó el proyecto Favre, aceptado por el gobierno, por una mayoría de 355 votos contra 142.

El proyecto aprobado por la Cámara fué llevado inmediatamente al Senado, y la comisión, que fué elegida el 5 de febrero, se compuso de ocho senadores hostiles contra uno solo favorable. Tres días antes de la apertura de la discusión, se supo que la Sala que entendía en la denuncia presentada contra el príncipe Napoleón había pronunciado auto de sobeseimiento. De modo que, por una singular ironía de las cosas, aquel inoportuna manifestación había provocado todo aquel ruido y aquella larga crisis, era absuelto, y aquellos otros cuya actitud en el ejército, ó en la vida civil, siempre había sido correcta, se veían amenazados de destierro ó al menos de la pérdida de su empleo, pues desde el principio del debate no se había tratado más que de los

príncipes de Orleans, y el único proyecto dirigido contra el príncipe Napoleón, el de Devés, había sido eliminado sin discusión. El nombre de Orleans sólo se había pronunciado una vez, quince días antes de la aparición del Manifiesto, en un artículo de *La Revista de Ambos Mundos*, en que el autor recordaba la ley de 21 de diciembre de 1872, que les devolvió 45 millones, y demostraba, con muy poca oportunidad, apoyándose en los precedentes históricos y en el derecho estricto, la equidad de aquella medida.

El ponente de la comisión senatorial, Sr. Allou, encargado de proponer la desestimación pura y simple del proyecto de ley, había redactado un trabajo muy académico, pero que no tenía bastante en cuenta la situación creada al gobierno y á la República por todo el ruido armado en torno de una cuestión tan desdichadamente suscitada. En derecho puro tenía razón; políticamente, no. Los mismos que deploraban aquella discusión, reconocían la imposibilidad de poner fin á todo con un voto negativo, y los senadores más moderados habían presentado proposiciones que parecían poder reunir la mayoría en una asamblea republicana. Barbey era autor de un contraproyecto que eliminaba las disposiciones relativas á la ineligibilidad de los príncipes, pero dejaba al ministro la facultad de declarar en situación de reemplazo á los príncipes oficiales y facultaba al gobierno para expulsar á los que atentasen contra la seguridad del Estado. León Say y Waddington añadían al proyecto Favre una enmienda castigando con el destierro el acto de pretendiente ó la manifestación encaminada á atentar contra la seguridad del Estado.

La discusión en el Senado duró dos días. El 12 de febrero se emitieron cuatro votos. Por el primero, la Alta Cámara acordó pasar á la discusión de los artículos, evitando toda apariencia de propósito preconcebido. Por el segundo, desechó el primer artículo del contraproyecto Barbey, al que se había adherido Devés en nombre del gobierno. Por el tercer voto, desechó el artículo 1.º del proyecto Favre, y por el cuarto voto adoptó el contraproyecto León Say. El gabinete, doblemente derrotado por el segundo y tercer votos, presentó su dimisión el 13 de febrero al presidente de la República, pero siguió en el gobierno á fin de poder transmitir á la Cámara el texto votado por el Senado.

La comisión de la Cámara desechó este texto y adoptó el de Floquet, que había desechado días antes, y nombró ponente al Sr. Marcou. La discusión se abrió en la Cámara el día 13 de febrero. Madier de Montjau dió su famoso grito de «¡Guerra al Senado!» Marcou y Pelletán hablaron en el mismo sentido y apoyaron la proposición Floquet. Antonin-Proust y Martin-Feuillée, más políticos, penetrados de la necesidad de llegar á una inteligencia entre ambas Cámaras, reproducen los dos primeros artículos del contraproyecto Barbey; los apoya Floquet mismo, y los dos artículos son adoptados por una gran mayoría.

Devés vuelve al Senado, que desecha el artículo primero. Hacía un mes y un día que el príncipe Napoleón había publicado su manifiesto: todos los dictámenes, todas las discusiones, todos los discursos de ambas Cámaras habían conducido á un lamentable abortamiento. Nada quedaba, ni siquiera un gabinete des-

membrado, pues el 18 de febrero fué definitivamente aceptada la dimisión de los restos del ministerio del 7 de agosto. Tres días después, formóse un nuevo gabinete, cuyo primer cuidado fué el de aplicar á los príncipes oficiales la ley de 1834.

Un decreto de 23 de febrero dejó de reemplazo á los duques de Aumale, de Chartres y de Alenzón. Un senador de la derecha, el general Robert, interpelló al nuevo ministro de la Guerra sobre aquella medida. La orden del día pura y simple, votada por 146 votos contra 107, fué una aprobación resignada, pero una aprobación al fin de la conducta del gobierno. La cuestión de los pretendientes quedaba por el momento resuelta, después de haber llenado de amargura los últimos días ministeriales de hombres políticos llenos de buena voluntad, de hombres de honor cuyos principios prudentísimos merecían otro fin.

En los intervalos de los debates apasionados y confusos á que dió lugar la ley de los pretendientes, el gabinete supo guardar una buena actitud durante las discusiones, más tranquilas y mucho más interesantes, de la reforma judicial y de la ley municipal que se plantearon en la Cámara á últimos de enero y á principios de febrero.

Después del voto del 10 de junio de 1882 sobre la elección de los magistrados, la comisión se ocupó lentamente en preparar una proposición de conformidad con dicho voto. El nombramiento del ponente, señor Legrand, para el cargo de ministro de Comercio retrasó aún más los trabajos de la comisión, y el nuevo ponente, Sr. Lepère, no pudo someter una solución á la Cámara hasta el 15 de enero. Las disposiciones de la Asamblea habían cambiado. El partidario más acérrimo de la elección, Julio Roche, se había convertido á otro sistema y era de suponer que otros diputados habrían hecho igual conversión. Fuera como fuera, el ponente proponía para el nombramiento de jueces una elección gradual; ampliaba la competencia de los jueces de paz á 200 francos sin apelación y á 500 con apelación, la de los tribunales de distrito á 3.000 francos, en definitiva, y, para cantidades superiores, con apelación al tribunal más próximo; establecía una sala de lo criminal cerca de cada tribunal de departamento y hacía elegir los jueces de casación por el Senado y la Cámara reunidos, como para la elección de presidente de la República.

Este proyecto apoyado por Lepère, Clemenceau y Gerville-Reache, fué vivamente combatido por Julio Roche, Granet y Waldeck-Rousseau. El antiguo ministro del Interior demostró que los jueces, aun nombrados por el poder, emanan del pueblo, puesto que el poder mismo no es más que una emanación del sufragio universal. Según Waldeck-Rousseau, con la elección de los jueces se corría el peligro de romper la unidad nacional, de restablecer algo parecido á los antiguos Parlamentos, puesto que, en ciertas poblaciones, habría camarillas, aquí bonapartistas, allá legitimistas, acullá radicales. Por consiguiente, los jueces no debían ser elegidos directamente por el pueblo. Después de este discurso, el sistema Lepère fué desechado por 274 votos contra 224 y la comisión de la reforma judicial presentó la dimisión. Pocos días después, el ministro de Gracia y Justicia, Sr. Devés, presentó un nuevo proyec-

to. Los acontecimientos no permitieron discutirlo, pero Martin-Feuillée, sucesor de Devés en el nuevo gabinete, se inspiró grandemente en él.

La discusión de la ley municipal únicamente fué iniciada durante el ministerio Duclerc, ó mejor dicho, durante el ministerio Fallieres, puesto que empezó el 8 de febrero. Había tres sistemas en presencia: el del municipio autónomo, el del municipio sometido á la tutela del departamento y el del municipio sometido á la tutela del Estado. Los radicales, con Clemenceau, recomendaban el primer sistema; los semi-radicales, como Goblet, que había presentado el proyecto, sostenían el segundo; la mayoría de la comisión y su ponente, Marcere, apoyaban el tercero. El gobierno, por boca de Develle, declaró que abandonaba el proyecto Goblet para hacer suyo el de Marcere.

Para completar la historia del gabinete del 7 de agosto faltanos enumerar los actos principales del ministro de Instrucción pública. El 3 de noviembre, Duvaux había pasado una circular á los prefectos sobre los emblemas religiosos en las escuelas primarias. Siendo la escuela neutral, desde el 28 de marzo de 1882, convenía respetar la ley y no introducir emblemas de ningún culto en las escuelas de nueva construcción; en las escuelas antiguas había que respetar los emblemas existentes, en todos aquellos puntos donde el quitarlos pudiese lastimar las convicciones religiosas de las poblaciones. Por otra parte, el verdadero espíritu de la ley de 28 de marzo era la transformación de los programas y no la de los locales. Para la aplicación de esta ley redactó también Duvaux su circular de 22 de diciembre, sobre el examen impuesto á los muchachos educados en sus casas, examen, después de todo, muy modesto y que no justificaba el reproche que se dirigió al ministro de introducir en la escuela y en la familia la política y sus pasiones. Otro reproche, de orden pedagógico, se dirigió al ministro. Pretendióse que Duvaux se mostró sistemáticamente opuesto á la enseñanza superior. Procedente de la segunda enseñanza, Duvaux pensaba que ésta, que forma las clases llamadas directivas, tenía una importancia particular en la democracia francesa y hubiera querido obligar á los alumnos que salían de la escuela normal á algunos años de práctica en la segunda enseñanza. Pero esta exigencia no tenía nada de hostil.

El ministro probó, por otra parte, todo el interés que le inspiraba la enseñanza superior estudiando la cuestión, aun no resuelta, de la institución de un doctorado en ciencias médicas; organizando, para el doctorado, en las facultades de derecho tres cursos de pandectas, de historia del derecho y del derecho constitucional; abriendo una información sobre el régimen de las escuelas de pleno ejercicio y de las escuelas preparatorias de Medicina y Farmacia y otra información sobre la institución de los cursos libres en las Facultades; introduciendo excelentes modificaciones en el servicio de las bibliotecas universitarias; ocupándose con suma solicitud del mejoramiento de locales en las Facultades de Letras; haciendo formar una lista oficial de los trabajos personales de los profesores de las Facultades de Ciencias y de los profesores de las Facultades de Letras, y formulando, en fin, el 18 de febrero de 1883, vispera de su caída, excelentes reglas para la organización

del trabajo y para la preparación de los grados en las facultades de Ciencias y Letras. Aun durante la discusión de los presupuestos, aun durante el agitado período del 15 de enero al 21 de febrero, la actividad de Duvaux fué incesante y se aplicó á todos los órdenes de enseñanza, pero particularmente á la enseñanza superior, lo cual no impidió que sus adversarios propalasen la leyenda de que había administrado contra esta enseñanza.

El gabinete Duclerc-Fallieres desaparecía, á su vez, después de siete meses y días de existencia, derribado por la confusa tormenta que el manifiesto del príncipe Napoleón había producido y cuya verdadera causa era el funesto acontecimiento del 31 de diciembre de 1882.

Desde el 30 de enero de 1879, fecha de su elección, hasta el 14 de noviembre de 1881, Grevy no había comprendido que el hombre que personificaba la República debía ser llamado al frente de sus consejos. Desde el 14 de noviembre de 1881 hasta el 26 de enero de 1882, más bien lo soportó que lo sostuvo. Desde el 26 de enero hasta el 31 de diciembre de 1882 no comprendió tampoco que, viviendo Gambetta, era imposible constituir un gabinete duradero de que no formase parte el jefe de la unión republicana. Muerto Gambetta, ¿iba Grevy á otorgar á su heredero político, al hombre de gobierno más importante que tenía entonces la República, la plena confianza que es la probidad de un jefe de Estado y que Gambetta nunca había obtenido? Esta era la pregunta que se hacían todos los políticos clarevidentes y que el nuevo presidente del Consejo se formulaba á sí mismo el 21 de febrero de 1883.

## XII

Pocas crisis ministeriales hubo tan cortas como la de 1883: el 21 de febrero quedó constituido el gabinete Ferry. El diputado por los Vosgos, considerado como el único heredero posible de Gambetta, tomó con la presidencia del consejo el ministerio de Instrucción pública en que tan grandes reformas había hecho. Challeml-Lacour, uno de los lugartenientes de Gambetta durante la Defensa nacional, ex embajador en Londres y autor de dos discursos pronunciados días antes en el Senado, en la discusión de la ley de los pretendientes, fué nombrado ministro de Negocios extranjeros. Era hombre de ardientes convicciones republicanas, algo moderadas por la edad, de virtudes estoicas y de admirable talento tribunicio. Waldeck-Rousseau, antiguo compañero de Gambetta en el gabinete del 14 de noviembre, volvió á encargarse de la cartera del Interior. El ministro de Gracia y Justicia, Martin-Feuillée había formado también parte del ministerio Gambetta como subsecretario de Cazot. En Hacienda Julio Ferry había conservado á Tirard y en Guerra al general Thibaudin, dando la cartera de Marina al senador Carlos Brun, antiguo ingeniero de construcciones navales. Meline, el futuro creador del orden del Mérito agrícola, fué por primera vez ministro de Agricultura. Herisson pasaba de Obras públicas á Comercio, dejando su sucesión á Reynal, y Cochery conservaba la cartera de Correos y Telégrafos.

El nuevo gabinete era á base de izquierda republicana y unión republicana, pero base ancha y sin exclusi-

vismo, puesto que dos de los ministros, el general Thibaudin y el Sr. Herisson, pertenecían á la izquierda radical. El presidente del Consejo pensaba que la mayoría podía extenderse mucho por la izquierda, con la condición de que los miembros de la misma mayoría comprendiesen las necesidades gubernamentales. Hacía obra de concentración republicana, pero no sacrificaba un solo punto de su programa muy limitado y muy moderado y no admitía en él nada de utópico ó quimérico.

Cuatro años de poder casi continuo y cerca de treinta años de vida política le habían facilitado un profundo conocimiento de los negocios. Hombre de una laboriosidad infatigable, dotado de un valor sereno que se afirmaba en medio de las tempestades parlamentarias, Julio Ferry era quizá, en febrero de 1883, el único presidente del Consejo posible. Su valor, su carácter y la dignidad de su vida, constituían su fuerza. Su debilidad procedía de la oposición sorda que encontraba en el Elíseo, de la oposición declarada que encontraba en la extrema derecha y en la extrema izquierda de la Cámara, y de una impopularidad que databa del sitio de París. Después de la aceptación definitiva de la dimisión del anterior gabinete, Grevy había pensado desde luego llamar á Freycinet: el estupor general le había hecho renunciar á ello; pero Freycinet seguía siendo *persona grata* en el Elíseo, mucho más que Ferry, y, en la camarilla del presidente de la República, se cultivaban cuidadosamente los sentimientos de desconfianza, por no decir de animosidad, para con el nuevo presidente del Consejo. Julio Ferry no solía quejarse, pero en un momento de irritación, al salir de una sesión algo violenta, se le oyó decir «que le tiraban por la espalda,» desde la calle del Faubourg-Saint-Honoré (calle en que está situado el Elíseo), mientras él hacía frente á la derecha y á la extrema izquierda de la Cámara. Los diputados de estos grupos llenaban de injurias y ultrajes al presidente del Consejo y, en los linderos de la derecha como en los linderos de la extrema izquierda, muchos diputados, arrastrados desde luego por la corriente de la mayoría, sólo esperaban una ocasión oportuna para pasar la frontera. Ferry no tenía nada de lo necesario para retenerlos. No era hombre para sacrificar el interés público á los intereses particulares, para conceder á un diputado dudoso el menor de esos favores que los jefes del poder tienen á su disposición y que pueden determinar las adhesiones inciertas. Por estas y otras razones, Ferry era impopular: reconcentrado, poco expansivo, no sabía ó no quería cautivar á la multitud. Demasiado franco para halagarla, demasiado altivo para rectificar la opinión que se tenía de él, sólo manifestó importarle algunos sufragios selectos, seguro de que los que le hubiesen visto de cerca y hubiesen admirado su obra, atestiguarían su mérito ante la posteridad.

La declaración ministerial, que fué leída el 22 de febrero, limitaba el terreno muy circunscrito en que pretendía mantenerse el nuevo gabinete y daba una idea clara de la política nueva inaugurada por Julio Ferry. Para poner fin á la crisis abierta por la humorada del príncipe Napoleón, anunció la intención de hacer uso de los derechos que la ley de 19 de marzo de 1834 daba al poder ejecutivo. La República no estaba en peligro, pero sí mal defendida por los que tenían la misión de hacerla respetar: iban á proponerse á las Cámaras